

La política fronteriza del norte de México. Perspectivas en la década de los noventa

*Tonatiuh Guillén López
Edgar W. Butler
James B. Pick**

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO es discutir los aspectos sociales y políticos involucrados en el futuro electoral de los estados fronterizos del norte de México. Tomando como referencia principal los acontecimientos de la década de los ochenta, el ensayo se dirige a presentar los posibles rasgos que configuren políticamente los años noventa. El espíritu general del ensayo reconoce que la sociedad mexicana apunta hacia una transición política en la que los estados fronterizos del norte han aportado una cuota fundamental. No sólo han avanzado en la apertura de espacios —notablemente en Baja California con el primer gobernador de oposición— sino que también han contribuido en la formación de una nueva cultura política que privilegia la reivindicación del papel ciudadano. También han transformado las organizaciones políticas: el paso más significativo fue aportado por el PAN, quien de ser un receptor pasivo de votos se convirtió en un activo promotor; en los estados norteros el neopanismo tuvo sus expresiones más radicales y consistentes. Incluso el partido oficial ha experimentado cambios considerables: unos dirigidos desde el aparato gubernamental, particularmente en Chihuahua; otros impuestos por la derrota electoral, como en Baja California.

La activa vida política que han mostrado los estados fronteri-

* Los autores agradecen a Wilfrido Ruiz Ochoa su colaboración como asistente de investigación.

zos en los últimos años se dirige a consolidarse en la década de los noventa. La condición es el establecimiento de nuevas reglas en la lucha electoral y la apertura democrática que termine con las limitaciones que enfrenta el ímpetu ciudadano. Trataremos de definir el marco político y social que orientará las tendencias políticas de los estados fronterizos en los próximos años, hacia el fin del actual sexenio.

1. El tránsito del sistema político

Particularmente en los últimos dos años, la modernización y el cambio han sido temas recurrentes en los análisis sobre la sociedad mexicana y en el discurso de las organizaciones sociales, incluyendo la actual administración federal; esto ha sido así especialmente en el terreno político. México se encuentra nuevamente en el umbral de modificaciones del sistema político que, esperamos, realmente lo aproximen a normas democráticas en su funcionamiento. En relación con tiempos anteriores, las actuales tentativas de reforma no obedecen a una demanda expresada por actores localizados sectorial o regionalmente, sino a un amplio proceso social de crecientes y diversas expresiones; ya no está en duda el cambio, sino su forma.

La particularidad del momento actual radica precisamente en la generalización de la demanda democrática, que abarca a la sociedad *y al Estado*, al grado de que la reforma del sistema político ha llegado a convertirse en proyecto gubernamental. Con la intervención del Estado, la expectativa de transformación de dicho sistema adquiere dos rasgos esenciales: que efectivamente avance, abriendo espacios a la participación ciudadana y, a la vez, constituyendo el aspecto dominante, que encuentre como límite las condiciones de supervivencia de la actual burocracia política. Considerando lo anterior, al menos en el corto plazo no son previsibles cambios en la legislación electoral que abran completamente el juego a las fuerzas políticas del país.¹

La responsable inmediata de la generalizada demanda de trans-

¹ No es sorprendente que las modificaciones a la legislación electoral durante 1989 no dejaran satisfechas las expectativas de los partidos de oposición, ni siquiera las del PAN, quien tuvo una participación decisiva en la aprobación de dicha legislación por la Cámara de Diputados. Faltan aún elementos importantes que deberán definirse en el próximo periodo legislativo, que establecerán con claridad las nuevas reglas y, particularmente, los nuevos límites alcanzados.

formación de la política nacional fue, sin duda, la elección presidencial de 1988. En ella quedó plenamente representado el proceso de cambio de la vida política nacional, además de convertirse en símbolo insistente de la demanda democrática.² En la cúpula gobernante la elección presidencial también provocó el reconocimiento de la necesidad de cambios políticos significativos. Enrique González Pedrero, en 1988 director del IEPES del PRI y entonces uno de los principales ideólogos de la reforma democrática entre la burocracia política, en un documento que se convirtió en motivo de grandes discusiones expresó lo siguiente:

Es claro que a partir del 6 de julio se ha iniciado una etapa de transición hacia la plena democracia mexicana [...] Nadie puede anticipar hasta dónde llegará el extraordinario dinamismo catalizado en los últimos días, pero todos percibimos que hace falta empezar a consolidar nuevas estructuras. Hay que extender y expandir la visión, a sabiendas de que estamos en presencia de una oportunidad excepcional para vigorizar la vida política del país y fortalecer, con ella, el futuro nacional [...]

En el fondo, quizá, lo que se ha revelado con las elecciones del 6 de julio es que el centro de la concertación política ha variado: si durante casi 60 años se mantuvo dentro del Partido, que nació precisamente de un pacto político y social indispensable, fundiendo desde sus orígenes la acción partidista con la tarea de gobierno, ahora ese centro se ha desplazado hacia una concepción más actual del estado. Bajo esa concepción, el partido se ha vuelto literalmente parte, y ya no síntesis política del todo.³

También el ahora presidente Carlos Salinas, primero durante su campaña y después en el cargo gubernamental, reconoció la necesidad de cambios en la política nacional.⁴ En su mensaje de toma de posesión, el reconocimiento previo se convirtió en programa de gobierno:

² El proceso social de demanda democrática tan generalizado ha sido sistematizado en el libro coordinado por Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre y Rolando Vega, *México: el reclamo democrático*, Siglo XXI, 1988.

³ Enrique González Pedrero, "La lección de la elección", *Perfil de la Jornada*, México, *La Jornada*, 5 de agosto de 1988.

⁴ "Me parece que en México se terminó la época del partido único, que era lo que en realidad existía. Tenemos un sistema pluripartidista y mi intención es hacer las transformaciones en el PRI que nos permita mantenernos como partido mayoritario. [...] Creo que en México tenemos que aprender a respetar lo que el electorado decida", *La Jornada*, 2 de julio de 1988, p. 1.

En las instituciones representativas, en las organizaciones nuevas y en transformación; en la perspectiva crítica de los mexicanos, tenemos un rostro diferente al de México que hace no más de una década. Avanzamos hacia un nuevo equilibrio en la vida política nacional. Éste no surgió el 6 de julio, se manifestó en esa fecha [...] Hay un nuevo México político, una nueva ciudadanía con una nueva cultura política. Su expresión reclama cauces transformados [...] Ante esta nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nuestra vida democrática.

Durante 1988, sociedad y estado manifestaron y aceptaron que en México existe un rezago democrático. Sin embargo, al asumir el gobierno la dirección de la transformación política, los límites del cambio quedan implícitos en la reproducción de la misma estructura de dominación.⁵ La transición política del país no se encuentra determinada por un movimiento externo que imponga los cambios en tiempo y forma; si bien el movimiento de ciudadanos y partidos los presiona, no los decide en última instancia. Las modificaciones al sistema político, finalmente comprendidas desde el poder central como un imperativo histórico, han conducido a la élite política a ubicarse en su vanguardia y, por lo mismo, a marcar sus límites, como un efecto implícito.

Desde el horizonte estatal del proceso, el espacio de cambios del sistema político se reduce a dos: la legislación electoral y las modificaciones internas del partido oficial, manteniendo entre ellos una relación estrecha y mutuamente dependiente. Al parecer existe la intención de adecuar primero al PRI a las condiciones de competencia electoral abierta y, después, suponiendo un tránsito exitoso, hacer las modificaciones electorales más sustanciales. En esta lógica, no resulta sorprendente que los recientes cambios en la legislación electoral hayan sido calificados como una “contrarreforma” que, lejos de significar una apertura democrática, fortaleció la presencia del partido oficial en la Cámara de Diputados. Paradójicamente, el presidencialismo no sólo no se transforma sino que se fortalece. La apertura política como demanda social se ha convertido, en la actual administración, en voluntad presidencial promovida como acción de gobierno. Inserta todavía en una cultura y una estructura política presidencialistas, su relativo cumplimiento ha favorecido la imagen del presidente Salinas.⁶ El proyecto de un pre-

⁵ Con plena conciencia de esta lógica, Carlos Salinas de Gortari sostuvo que su partido pretende seguir avanzando en la reforma del sistema político, pero de manera que sirva para fortalecerlo “y no para hacerle el haraquiri”, *La Jornada*, 15 de marzo de 1989, p. 1.

⁶ Aquí cabe señalar la siguiente paradoja: efectivamente, la imagen del pre-

sidencialismo “acotado” por el poder legislativo, como vislumbraron algunos analistas, parece posponerse hasta la primera mitad del sexenio, por lo menos, suponiendo que ocurra una recomposición en las fuerzas integrantes del poder legislativo en las elecciones federales de 1992. La duda aumenta no sólo a causa del fortalecimiento de la imagen presidencial de Carlos Salinas, sino también debido a los limitados cambios electorales que promueve el partido oficial respecto del poder legislativo. El resultado es que el presidencialismo y, con él, la “voluntad presidencial” para reconocer los triunfos de los partidos de oposición, continuará siendo un mecanismo real de decisión política.

Las modificaciones a las reglas internas del PRI son un proceso tanto o más complicado que las reformas a la legislación electoral. Sin embargo, de la misma manera que la modernización, su adecuación a las nuevas condiciones ha asumido formas diferenciales regional y sectorialmente. Tiende a ser una necesidad apremiante en áreas urbanas, como en la capital del país y otras grandes ciudades; pero, a la vez, encuentra regiones donde se trata de un problema prácticamente inexistente. Se espera que la transformación del PRI —o su intento— tenga como espacio prioritario (no exclusivo) las zonas avanzadas en la modernización, especialmente los estados fronterizos del norte de México. La política moderna, como frase del sexenio y como proceso activo en la legislación electoral y en los cambios internos del PRI, la tendremos particularmente en esta región, que probablemente anticipará formas y estilos electorales que después se generalizarán en el país.

Si las modificaciones a la legislación electoral conducen a una mayor apertura en el terreno formal, sólo las zonas del país que han consolidado a un electorado de oposición podrán sacar ventaja de las nuevas reglas. En relación con los resultados electorales,

sidente Carlos Salinas se ha fortalecido con los espacios democráticos abiertos (Baja California) y, seguramente, con los avances efectivos que conteagan las reformas a la legislación electoral. Sin embargo, en el largo plazo, en la medida que se avance en la democratización y los espacios conquistados, el peso del *presidencialismo* disminuye, al reducirse sus espacios discrecionales mediante la institucionalización del juego electoral. Mientras más fuertes sea en este sentido la imagen del presidente Salinas, menores son las atribuciones del poder presidencial. Sobre este mismo tema, Arnaldo Córdova argumenta “la lucha por la democracia en México no puede no ser, al mismo tiempo, la lucha contra el presidencialismo y por una nueva constitución”. Arnaldo Córdova, “La constitución y la democracia”, en Rolando Cordera, Raúl Trejo y Juan E. Vega (coords.), *México: el reclamo democrático*, México, Siglo XXI-ILET, 1988, p. 97.

la apertura será una cuestión indiferente en aquellas regiones donde la dominación tradicional del PRI se mantiene, conservando las elecciones su carácter plebiscitario. Pero será un proceso particularmente intenso en las regiones donde la oposición se ha consolidado. Las primeras coinciden con las zonas y sectores sociales tradicionales ligados al pasado de la sociedad rural que hasta hace poco más de dos décadas dominó en México; las segundas, con las áreas y sectores modernos, urbanos, con fuerte presencia de clases medias. Si este esquema lo analizamos desde el punto de vista de las diferencias políticas regionales, la parte del país que se conserva dentro del esquema tradicional es la que garantizará al PRI su supervivencia dominante en el corto plazo. La parte opositora, donde urge al partido oficial reestructurarse, las probabilidades de crecimiento de la oposición harán más intensos y competitivos los procesos electorales.

En general, el futuro de la política electoral está orientado por los siguientes tres movimientos: una apertura legal limitada; una búsqueda de reestructuración del partido oficial; el crecimiento y consolidación de una ciudadanía que ha revalorado el proceso electoral y que, por lo mismo, ahora se define como oposición ante un sistema político que ha excluido la democracia de su ejercicio real. En cada uno de estos procesos, los estados fronterizos del norte de México han tenido y seguirán teniendo un papel decisivo. Sin ser los únicos, van a formar parte activa de la consolidación de procesos electorales más competitivos, a pesar de los límites nacionales impuestos por las reformas a la legislación electoral. En otros términos, y probablemente más aquí que en otras partes —especialmente el Distrito Federal, por ejemplo— los espacios regionales tienden a la apertura.

2. El desarrollo de la oposición electoral

La necesidad de cambios en el sistema político mexicano ha estado fuertemente determinada por el crecimiento del electorado de oposición. A pesar de las restrictivas reglas de los procesos electorales, en la década de los ochenta el desarrollo del electorado de oposición adquirió una magnitud de verdadero desafío al partido oficial. En 1988 obtuvimos la medida más reciente sobre su extensión nacional —con todo y las protestas de los partidos de oposición sobre la veracidad de las cifras— que lo ubican prácticamente en la mitad de los electores. Con anterioridad a ese año, la consolidación

del electorado de oposición había seguido un ritmo ascendente, paralelo a la modernización del país y sus efectos en la estructura social. Sin embargo, rompiendo con esa tendencia, en 1988 el electorado de oposición tuvo un crecimiento extraordinario que no se explica solamente por la modernización. Importantes sectores ligados a la sociedad tradicional, de rasgos rurales y sujetos del juego corporativo, en 1988 dieron un salto cualitativo a la oposición gracias a su identificación con el movimiento neocardenista. Esta distinción en la génesis del electorado opositor, como revisaremos posteriormente, es importante para evaluar las expectativas políticas en la frontera norte.

Desde el panorama anterior, las perspectivas de la política mexicana dependen en gran medida de la expansión del *electorado de oposición*. Para su formación no basta el reconocimiento de que en la conciencia social existe una actitud crítica hacia el sistema político o hacia los resultados adversos de la administración gubernamental. Si bien esta actitud es una condición imprescindible, el elemento decisivo es su *conexión* con los partidos políticos. Una de las grandes dificultades para este tránsito ha sido la desvaloración de las elecciones, producto del constante control gubernamental que las convirtió en un ritual en el que pocos o nadie creía (cree). Persisten aún los obstáculos concretos, muchos de ellos violentos, que impiden que en términos reales revaloren las competencias electorales, pero fuerte es también el freno que impone la cultura política.⁷ El encuentro entre ciudadanos y partidos de oposición es en sí mismo un proceso complejo y difícil, tal como ha sido la reproducción de su distanciamiento.

En gran medida, el desarrollo de la práctica ciudadana —pensarse y actuar como tal, siguiendo su contenido formal— equivale al mismo tiempo al desarrollo del electorado de oposición. En México, este proceso ha tenido dos fuentes principales que condujeron a su actual magnitud: *a*) el proceso de modernización del país, y *b*) el movimiento neocardenista de 1988. Introduciendo la perspectiva regional, hasta antes de la pasada elección presidencial el desafío del sistema político se encontraba localizado en los ambientes

⁷ Un ejemplo de lo primero lo encontramos en las recientes elecciones locales en Guerrero y Michoacán, repletas de incidentes violentos. Sobre lo segundo, el desencuentro de la conciencia social con su papel ciudadano ha sido un proceso paralelo a la reproducción del sistema político; un buen recuento es el artículo de Carlos Monsiváis, "Notas sobre la cultura política en México", en *México: el reclamo democrático*, *op. cit.*, pp. 383-387.

urbanos principalmente, y orientado hacia los estados del norte.⁸ Sin embargo, en 1988 la expansión del electorado de oposición ocurrió prácticamente en todo el país, incluyendo las áreas rurales (sin que se perdiera el acento urbano). Si bien en términos cuantitativos ambas fuentes del electorado de oposición expresan lo mismo, su origen revela algunas variaciones sobre su estabilidad futura.

La modernización

Actualmente existe un consenso generalizado sobre el significado de la elección presidencial de 1988: la inaplazable demanda democrática.⁹ En el espacio político se trató del indicador más acabado sobre la transformación social del país, que en términos muy amplios puede ser expresado como el tránsito de una sociedad rural a una sociedad urbana.

No es la primera vez que en México se plantean modificaciones a la legislación electoral, tanto desde la sociedad como desde el gobierno. Incluso, de alguna forma, el tránsito de lo rural a lo urbano había estado presente como argumento de las sucesivas reformas electorales. Pero no aparecía con la intensidad y en el papel privilegiado que tiene en la coyuntura actual: ahora se trata del argumento *principal*, que ocurre de manera simultánea con una fuerte expresión electoral de oposición. Hasta 1987, las reformas de la legislación electoral habían sido justificadas como parte de una línea continua de perfeccionamiento de la democracia mexicana, casi con independencia de los cambios sociales y como concesiones que la mayoría (el PRI) otorgaba a las minorías (la oposición).¹⁰

⁸ Véase el análisis que al respecto hace Aguilar Camín en "El canto del futuro", *Nexos*, núm. 100, 1986, pp. 15-29.

⁹ "Los mexicanos votamos, y de hecho hemos seguido votando a partir del 6 de julio, por la democracia. Con énfasis de distinta intensidad, pudo apreciarse también un reclamo que había estado virtualmente contenido, y que por eso en algunos sitios se manifestó de manera novedosa. Se trató de un reclamo ante las inquietudes de la política económica reciente y por una apertura creíble y duradera, del sistema político". Rolando Cordera Campos, Arnaldo Córdova, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre, Arturo Whaley Martínez, José Woldenberg, "Para una transición democrática", *Perfil de la Jornada*, 28 de agosto de 1988.

¹⁰ Por ejemplo, en la iniciativa de reformas constitucionales que presentó Miguel de la Madrid a la Cámara de Diputados que dio lugar a la reforma electoral de 1987, encontramos lo siguiente: "La democracia sintetiza hoy el consenso entre los mexicanos. Su preservación, su perfeccionamiento impulsa la construcción del

Desde una perspectiva de largo plazo, el cuestionamiento social que reflejó la pasada elección presidencial —que ha sido conceptualizado como una crisis de legitimidad— no fue un efecto derivado sólo de la crisis económica, sino particularmente de los nuevos actores sociales y de sus reivindicaciones, generados a partir de la modernización económica del país; la “nueva mayoría social”, como los denomina Aguilar Camín. Sin excluir las repercusiones catalizadoras de la crisis, que hasta entonces había durado seis años, el cuestionamiento electoral de 1988 fue mucho más profundo que la demanda de volver a crecer y de recuperar la caída del ingreso.

La modernización del país ha seguido un ritmo intenso en las últimas dos décadas, con una distribución desigual que se ha reflejado principalmente en el desarrollo de la sociedad urbana. Con la modernización y sus espacios sociales y geográficos, el anacronismo del sistema político se refleja en el surgimiento y consolidación de oposiciones diferenciadas regional y sectorialmente. En cuanto tendencias generales, el “nuevo México político” —en los términos de Carlos Salinas de Gortari— se expresa en lo electoral como oposición; en términos espaciales se ubica como fenómeno urbano; como sector social dominan las clases medias y en términos generacionales está representado por la población joven. Las anteriores características pueden ser concluidas no solamente del análisis de la elección de 1988, sino de elecciones anteriores y de otras fuentes alternativas.

Adicionalmente a la estadística electoral, en las encuestas sociales pueden encontrarse indicadores sobre los cambios en la estructura social y sus efectos político-electorales. Los resultados de una de ellas aplicada en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y San Luis Potosí a finales de 1987, mostraron la importancia del indicador escolaridad como eje explicativo de las preferencias políticas de los entrevistados. Como tendencia, a mayor escolaridad le correspondía una menor preferencia por el PRI; la relación contraria se encontró respecto a los partidos de oposición.¹¹ El nivel de escolaridad, entendido como un indicador del

México renovado que nos hemos propuesto alcanzar [...] Avanzar en la democracia es adelantar en el fortalecimiento de la patria y en la condición de sus hombres”. *Código Federal Electoral*, 1987, pp. 18 y 19.

¹¹ Tonatiuh Guillén López, “The social bases of the PRI: Implications for political change”, Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith (eds.), *Mexico's alternative political futures*, La Jolla, Center for US-Mexican Studies, UCSD, 1989, pp. 243-264.

proceso de modernización que modifica los contenidos de la cultura, guarda coherencia con las características arriba expresadas sobre el "nuevo México político". También la variable guarda correspondencia con la relación de las clases medias con la oposición, de ésta con los jóvenes y, además, con el carácter urbano de los principales movimientos de oposición electoral. En ese mismo análisis dedicado a las bases sociales del PRI, se argumentó el progresivo distanciamiento del partido oficial de los efectos de la modernización sobre la cultura política. El desarrollo de una sociedad urbana, educada, tendiente a concentrarse en la clase media, genera al mismo tiempo una cultura política liberal antagónica con la estructura corporativa del sistema político.

Los estados fronterizos del norte de México cumplen con plenitud los rasgos fundamentales que caracterizan la transición del país hacia la modernidad, si bien dentro de los límites del subdesarrollo. Como puede demostrarse por medio de algunos indicadores, los estados fronterizos del norte se caracterizan por tener una composición que en relación con el promedio nacional destaca por su perfil moderno. La escala que se presenta en el cuadro 1 y en el mapa 1, muestran un indicador de modernización construido con los factores siguientes, a los que se asignó un peso diferenciado: escolaridad, urbanización, desarrollo tecnológico y estructura ocupacional. Las variables utilizadas para estimar los factores fueron las siguientes: urbanización (porcentaje estatal de población urbana en 1980); desarrollo tecnológico (estimado como disponibilidad per cápita de teléfonos en 1985); escolaridad (años de educación formal de la población en 1980), y estructura ocupacional (porcentaje de las ocupaciones profesionales y técnicas o porcentajes de las ocupaciones administrativas y de gerencia en 1980).¹² Los pesos diferenciados que se asignaron a los factores obedecen a la importancia desigual que tienen en la definición del electorado de oposición, entre los que destaca la escolaridad.

¹² El indicador de modernización fue construido multiplicando los valores de cada factor por los pesos que les fueron asignados (escolaridad 35, urbanización 25, desarrollo tecnológico 20 y estructura ocupacional 20), y estandarizando las desviaciones estándar de cada uno. El indicador consiste en la suma de los cuatro factores. En el caso de la estructura ocupacional, los valores de cada una de las dos variables que fueron analizadas no arrojaron diferencias significativas, lo que no sorprende debido a la conocida correlación elevada que existe entre ellas. En todos los casos, la información procede de fuentes oficiales del gobierno mexicano (cfr. James B. Pick, Edgar W. Butler y Elizabeth Lanzer, *Atlas of Mexico*, Boulder Co., Westview Press, 1989).

En la escala de modernización presentada en el cuadro 1, los seis estados fronterizos del norte se encuentran entre los primeros 12 lugares de las entidades del país; cuatro de ellos entre los primeros seis. Mientras el indicador de modernización tiene para los estados fronterizos un promedio de 13.49, el mismo asciende a 9.55% para el resto de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal. Con la exclusión de la capital del país del último grupo, su porcentaje desciende a 9 puntos. Como referencia, recuérdese que el puntaje alcanzado por los estados de Chiapas y Oaxaca, los últimos de la lista, fueron de 4.99 y de 4.52, respectivamente.

Cuadro 1
Índice de modernización, entidades federales
y distrito federal

Distrito Federal	23.17
Nuevo León	17.41
Baja California Sur	14.15
Baja California	13.95
Coahuila	13.43
Tamaulipas	12.85
Jalisco	12.32
Estado de México	12.21
Morelos	12.15
Sonora	11.91
Colima	11.85
Chihuahua	11.39
Resto del país	8.12

Factores del indicador: escolaridad, urbanización, desarrollo tecnológico y estructura ocupacional. Proyecto de base de datos sobre México, UCR, de fuentes oficiales.

No todos los estados fronterizos, como puede observarse en la escala, se ubican dentro del mismo ritmo de modernización, a pesar de sus ventajas respecto del promedio nacional. Por ejemplo, Nuevo León muestra el indicador más elevado, seguido por Baja California; por el contrario, Sonora y Chihuahua muestran una estructura interna más polarizada: una sociedad urbana muy desarrollada y, paralelamente, una sociedad rural con gran atraso.

Los rasgos de la modernización constituyen las condiciones materiales que explican el desarrollo de nuevos actores sociales y nue-

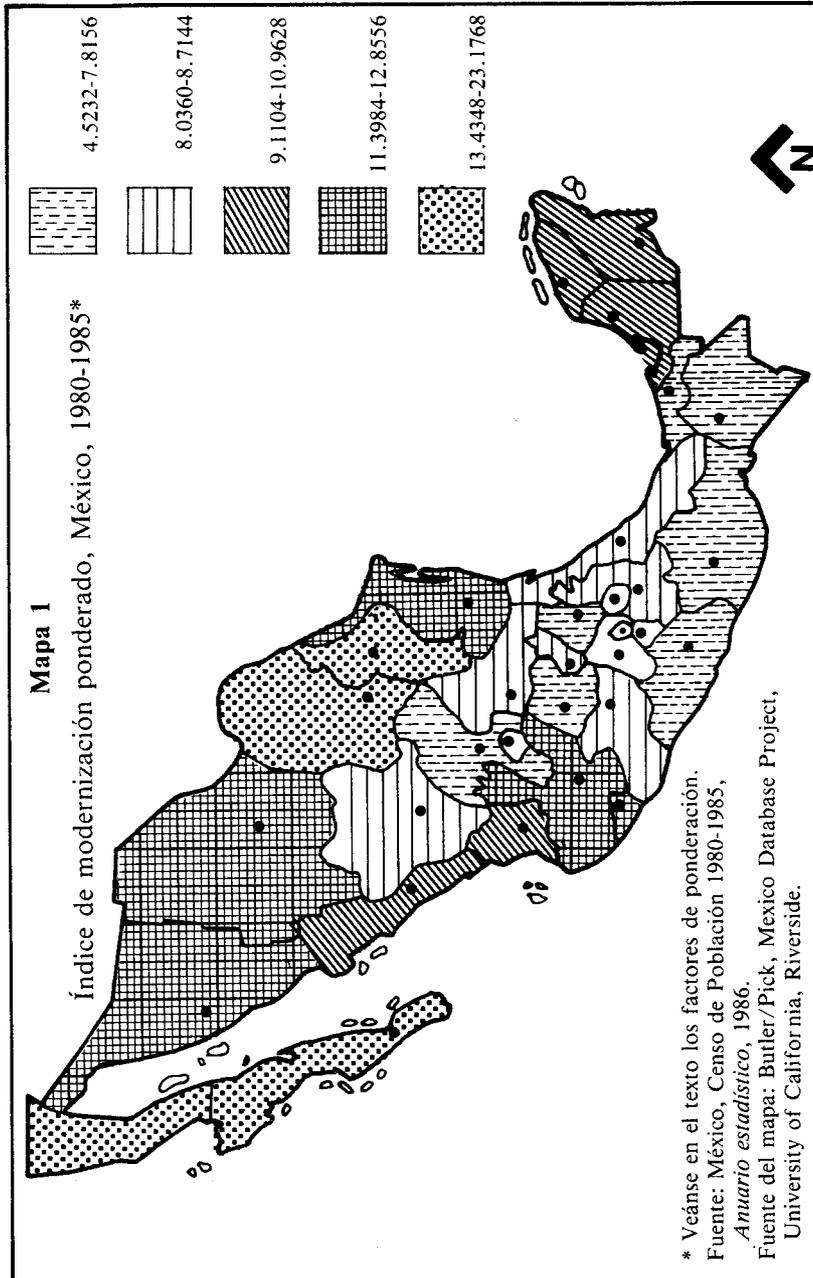
vas actitudes políticas. En los últimos años, la cultura política urbana ha destacado por presentar una creciente y sistemática oposición electoral, que en los años ochenta desarrolló sus formas más acabadas. La presencia de esta cultura —de contenido liberal— tanto en los estados fronterizos como en las grandes ciudades del interior del país, permite precisar el “efecto frontera” en el desarrollo de la oposición electoral. La influencia de la relación cotidiana con Estados Unidos es mucho más importante por sus repercusiones en el desarrollo de la economía regional y, a partir de ahí, del cambio en la estructura social, que como influencia ideológica directa que operativamente se tradujera en un intento de los fronterizos por copiar el modelo político norteamericano. En general, el modelo norteamericano (valores y patrones de consumo) es más conocido e imitado en función de la clase social y no en función de las regiones.¹³

En 1983, en la dirección nacional del PRI surgió una hipótesis que explicó la expansión del panismo en los estados norteños como una influencia ideológica norteamericana.¹⁴ Si bien en la vida fronteriza la internacionalidad implica también los aspectos culturales, ésta no es determinante del desarrollo de una cultura liberal. Sería tanto como pensar que la oposición electoral del Distrito Federal, por ejemplo, recibe también esa influencia, o bien que entre una y otra existen causas diametralmente opuestas. Una hipótesis para unificar ambas circunstancias es aceptar que para los estados fronterizos la influencia norteamericana es más económica que ideológica. Es decir, que la vecindad con Estados Unidos ha sido un factor decisivo para su modernización, pero no para los efectos sociales y culturales de ésta.

Los estados fronterizos tienen así una estructura social que tiende con fuerza a constituir actores sociales incompatibles con las formas corporativas del sistema político. Tienden a reproducir una sociedad urbana, educada y crítica, que políticamente —por su pro-

¹³ Esta conclusión se desprende del estudio coordinado por Jorge Bustamante, realizado en ciudades fronterizas (Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros) y del interior del país (Acapulco, Uruapán, Zacatecas y México D.F.), con una muestra total de 3 180 personas entrevistadas. La identificación con valores de la cultura norteamericana es un problema de estrato y no de región. Los sectores de altos ingresos son los relacionados más estrechamente con los patrones de consumo y valores de la cultura norteamericana, tanto en la capital del país como en las otras ciudades estudiadas. Jorge A. Bustamante, *Identidad nacional en la frontera norte de México*, Tijuana, Cefnomex, 1983.

¹⁴ En realidad se trató de un argumento político con el propósito de descalificar al contricante, pero que tuvo algunos ecos académicos.



pia naturaleza y no por razones ajenas— se orienta a construir una concepción liberal. Reconociendo esta base social resulta comprensible que durante la década de los ochenta y junto con la crisis, los movimientos político-electorales de mayor radicalidad *ciudadana* hayan tenido a esos estados como su espacio privilegiado. Entre 1983 y 1986, los estados fronterizos, algunos con más intensidad como Chihuahua, fueron los portadores en el terreno electoral del malestar social provocado por la crisis económica, que debilitó el soporte principal de la legitimidad del sistema político.¹⁵

En los próximos años es previsible la consolidación del cambio estructural de la sociedad fronteriza. Con esta perspectiva, la modernización y el desarrollo del ciudadano (en términos culturales) son procesos irreversibles. Cuanto más se avance en este tránsito, el ciudadano, abierto y volátil, como se le calificó en las elecciones locales de Baja California en 1989 fortalecerá sus rasgos de crítica.¹⁶ Paradójicamente, la consolidación de un ciudadano con este perfil, que pone el acento en el contenido formal de los valores políticos, no supone directamente que sea excluido del PRI —por supuesto, mientras el partido oficial se mantenga dentro de un esquema de apertura y no autoproclamado como destino manifiesto.

El neocardenismo

La consolidación de un electorado de oposición no es solamente la generación de sus condiciones materiales, cristalizadas en los nuevos actores de la sociedad urbana. También influyen las coyuntu-

¹⁵ “Fueron en verdad las expectativas que creó el régimen postrevolucionario —y que alentó con su crecimiento económico sostenido— lo que permitió contar con el mínimo de legitimidad para funcionar por sobre sus contradicciones políticas y sociales [...] La verdadera legitimidad del régimen postrevolucionario mexicano —esa que se basa no en el fiel cumplimiento de la constitución, sino en las expectativas económicas positivas de todas las clases sociales— se ha perdido”. Lorenzo Meyer, “La democracia política: esperando a Godot”, *Nexos*, núm. 100, 1986, pp. 39-46.

¹⁶ En las elecciones locales de 1989, en las que se eligieron gobernador, ayuntamientos y congreso local, el electorado de oposición bajacaliforniano votó por el PAN, cuando meses antes, en la elección presidencial de 1988, había favorecido a Cuauhtémoc Cárdenas. Si se atiende a las organizaciones, lo que es incorrecto, el voto osciló de izquierda a derecha; si se toman en cuenta las características del electorado y las condiciones de la política regional, se mantuvo la coherencia como voto de oposición. Cfr. Tonatiuh Guillén López, “¿Qué pasó en Baja California?”, *Política*, núm. 15, suplemento de *El Nacional*, 17 de agosto de 1989.

ras políticas, como la ocurrida en 1988 con el surgimiento del neocardenismo, que materializó el encuentro del potencial de oposición, heredado en parte de la modernización, con los partidos. La modernización crea a los sectores sociales pero no se traduce directamente en la acción electoral.

En 1988, el electorado de oposición adquirió una nueva gran magnitud, siendo ésta la contribución más importante del neocardenismo, más allá de sí mismo y más allá de sus particularidades como opción político-ideológica. Tanto, que el electorado de oposición nuevo, una vez dado el saldo cualitativo,¹⁷ al mantener la consecuencia con su nueva realidad ciudadana, puede en una nueva oportunidad continuar como oposición, pero a través de otra alternativa partidista. La lección fue Baja California entre 1988 y 1989, que conservó su electorado de oposición, expresándose primero como cardenista y posteriormente votando por el PAN.

El electorado de oposición no solamente ha tenido por fuente a los sectores producto de la modernización, si bien esa ha sido la tendencia histórica principal; también los ha encontrado entre los sectores tradicionales, tanto en el sentido económico como en el terreno electoral. El neocardenismo, nuevamente, ha sido el proceso político más eficaz de incorporación de ciudadanos a las filas opositoras. Previamente, la gran mayoría de este nuevo electorado de oposición se encontraba sujeto al juego corporativo, comprendiendo la política electoral dentro de su lógica y elementos; pero a través de su vinculación a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas adquirieron un nuevo perfil.¹⁸

Cuando hablamos del electorado de oposición fronterizo nos referimos principalmente a un electorado que ha sido fruto de la modernización. No obstante, en la frontera norte el efecto cardenista estuvo también presente, notablemente en Baja California. Cabe destacar que las condiciones del espacio social fueron otras en Michoacán, por ejemplo, aunque, electoralmente, encontramos el mismo efecto cardenista. La distinción que introducen las diferencias de estructura social permite elaborar una hipótesis sobre las

¹⁷ Que puede resumirse en una nueva conceptualización del proceso electoral —su revaloración— y, en un mismo movimiento, del papel ciudadano. Asumimos este resultado, independientemente del proceso concreto que lo produjo.

¹⁸ Con lo cual el neocardenismo puede comprenderse como un masivo proceso de *realización* del ciudadano; como la gran lección ciudadana de 1988 con diferentes grados de consolidación. Evidentemente no ha estimulado la creación de un ciudadano homogéneo.

características que adquirió, en cada caso, el nuevo electorado de oposición. Si en ambos la tendencia se dirige hacia su consolidación *ciudadana*, su avance en este sentido se desarrolló en grados diferenciados. Para decirlo de esta manera, con el neocardenismo el electorado bajacaliforniano adquirió un perfil *abierto*, dominando en su contenido el papel ciudadano formal. Por otro lado, el electorado de oposición michoacano adquirió un perfil electoral de contenido definido, *cardenista*. Si esta hipótesis es viable, el tránsito que el electorado de Baja California experimentó entre 1988 y 1989 sería virtualmente imposible para el electorado michoacano: aquí oposición y cardenismo son una identidad. En Baja California, en cambio, oposición es asumir una actitud de revaloración de las elecciones y del papel ciudadano bajo el predominio de sus contenidos formales. Siendo el contenido formal el aspecto dominante, puede entonces el perfil político permanecer abierto a las opciones concretas que le presente cada coyuntura. Más aún, abre también la posibilidad de que su carácter de oposición se vuelva relativo,¹⁹ lo que evidentemente se encuentra condicionado a una apertura democrática. En el corto y mediano plazos, como argumentamos líneas arriba, esa apertura no aparece en el plano nacional. En el ámbito regional, solamente Baja California —después de que las elecciones de 1989 dieron un triunfo al PAN en la gubernatura y en casi la mitad del congreso local— podría dar pasos firmes en la reforma democrática.

Si es viable la hipótesis sobre las diferencias internas en la consolidación del electorado de oposición (que es a la vez la consolidación de la cultura ciudadana), al menos en el corto plazo no es de esperar en los estados fronterizos un desarrollo de relaciones estrechas entre los partidos y los electores, ni relaciones estables, ni identidades ideológicas como argumento central en su relación. A este planteamiento debe añadirse el límite que impone la reducida disponibilidad de alternativas partidistas. Manteniéndose en la oposición, las alternativas regionales se reducen a dos: el PAN y la abstención.²⁰ De esta manera, a pesar de que las conexiones ideológicas entre el electorado y los partidos sean inestables o inexistentes, la reducción de alternativas puede provocar la apariencia de que existe

¹⁹ Después de las elecciones de 1989, algunos análisis nos remiten a la flexibilidad política del electorado. Juan Molinar H., "Michoacán: la disputa por la herencia", *Cuadernos de Nexos*, núm. 14, agosto de 1989.

²⁰ Después de las elecciones de 1989, algunos análisis nos remiten a la flexibilidad política del electorado. (Juan Molinar H., *op. cit.*)

identidad ideológica y relaciones orgánicas entre el electorado de oposición y determinado partido, concretamente el PAN.

La estabilidad del electorado de oposición

La cuestión del contexto espacial es particularmente trascendente para el futuro de la política regional. Por ejemplo, si en Baja California se modificaran las reglas electorales *estatales* garantizando la limpieza de los resultados, como es muy probable que ocurra, la transición ciudadana a la que hemos hecho referencia tiene todas las condiciones para consolidarse. En este caso, la discusión sobre el electorado de oposición dejará de tener pertinencia, retirándose del primer plano. Bajo condiciones de apertura y después de una experiencia panista en el gobierno del estado, en el congreso y en dos ayuntamientos, las presiones contra el partido oficial pueden ser menores que las de 1989. Por primera vez el PRI aparecería como *alternativa*, después de que la población ha conocido un gobierno con otras características; no quiere decirse que sea una alternativa mejor o peor; simplemente se destaca su nuevo lugar político. El PRI perdería el papel —o disminuiría su importancia— de eje central en la definición de la orientación del electorado.²¹

La apertura democrática en Baja California apunta a conformar un espacio excepcional en la política regional y nacional. Virtualmente se extinguiría el electorado de oposición, en los términos en que hemos señalado su construcción, asociada al proceso de modernización y al neocardenismo. El electorado se integraría en cada coyuntura de manera distinta atendiendo a intereses muy concretos. Con la completa subordinación de la discusión ideológica —que es ya la tendencia dominante— los puntos de referencia en la orientación partidista seguirían recayendo en los individuos, compartiendo así el esquema dominante de la democracia occidental.²² Adicionalmente, si se toma en cuenta el contexto de opciones limitadas, el cambio hacia el bipartidismo se presenta libre de obstáculos.

Otro caso que introduce elementos adicionales sobre la estabilidad del electorado de oposición es el del estado de Chihuahua. A diferencia del caso bajacaliforniano que se orienta hacia su vir-

²¹ Los nuevos criterios dominantes pueden ser los relacionados con la percepción sobre la eficiencia de la administración pública en todos sus niveles.

²² Rafael Segovia, "La personalización de la política. El elector va por el quién, no por el qué", *Cuadernos de Nexos*, núm. 14, agosto de 1989.

tual disolución, el electorado de oposición chihuahuense sugiere elementos relacionados con su reducción. La línea ascendente que promueve la modernización enfrenta de manera permanente las particularidades de la coyuntura política. En ocasiones le favorece notablemente, como en 1988; en otras lo limita, como revisaremos enseguida. En las pasadas elecciones locales de 1989, en que se disputaron ayuntamientos y el congreso estatal, prácticamente se extinguió la gran fuerza electoral y de movilización de masas que el PAN había concentrado entre 1983 y 1986. El electorado de oposición chihuahuense, que en los ochenta reclamó con mayor fuerza al sistema político la apertura democrática, al final de la década tuvo un giro abstencionista. En esas elecciones, a pesar de que —como señala Alberto Aziz— las urnas fueron vigiladas como nunca, hubo ausencia de electores. “Las paradojas de la democracia son innegables: cuando todas las condiciones estaban dadas para tener unas elecciones más civilizadas, los electores deciden no participar”.²³ De los 18 distritos de mayoría para elegir diputados, el PRI sólo perdió uno; de 67 municipios en disputa, no perdió uno solo.

Manteniéndonos dentro de la discusión sobre el electorado de oposición y sus características, en relación con el caso chihuahuense pueden plantearse dos hipótesis. La primera asume que el estado de desarrollo de la ciudadanía chihuahuense es equivalente al de la bajacaliforniana; es decir, que en la definición de su perfil opositor dominan los argumentos formales. La segunda hipótesis plantea que el estadio de consolidación ciudadana se encuentra en un nivel en el que dominan los contenidos concretos; en otras palabras, que el perfil de oposición equivale al panismo.

Dentro de los supuestos del primer planteamiento, por alguna razón que no interesa por el momento, el electorado de oposición revaloró —entre 1986 y 1989— su opinión sobre el partido oficial. La consecuencia fue un descenso de su perfil (abstencionismo), sin que éste llegara a convertirse en un apoyo al PRI. En estas circunstancias, su retiro de la competencia electoral permitió que la clientela del PRI —que tiene rasgos relativamente estables— definiera los resultados de las votaciones. El segundo planteamiento otorga un mayor peso a la relación entre el electorado de oposición y el PAN, y menos a la revaloración de la imagen del PRI que supone la primera hipótesis.

²³ Alberto Aziz Nassif, “Chihuahua: entre la abstención y el armisticio”, *La Jornada*, 5 de julio de 1989, p. 13.

Entre 1986 y 1989 la organización panista en Chihuahua sufrió un constante declive de miembros y recursos, precisamente entre los más importantes para la reproducción del aparato: el sector empresarial que había constituido la corriente neopanista. Debido a la estrecha relación entre la capacidad de convocatoria del aparato y el electorado de oposición, la desarticulación del PAN estuvo acompañada por la desarticulación de su electorado. Aquí la importancia del partido es definitiva para la canalización del potencial de oposición hacia la acción electoral; por lo menos el desarrollo del panismo entre 1983 y 1986 así lo demuestra. Ahora bien, también debe considerarse que después de 1986 la burocracia política chihuahuense no permaneció sin cambios. De hecho éstos se iniciaron desde el gobierno del estado, a través de Fernando Baeza,²⁴ quien comenzó a practicar una política de reconstrucción de alianzas, particularmente con el sector empresarial. En su relación con el resto de la sociedad chihuahuense, en términos generales puede decirse que su administración se caracterizó por un "salinismo" previo a Carlos Salinas.

Considerando los reacomodos entre la cúpula política y la económica del estado, la segunda hipótesis sobre las características del electorado chihuahuense se fortalece, pero sin llegar a excluir a la primera. Es decir, el peso decisivo en la explicación de lo ocurrido en las elecciones de 1989 recae en la descomposición del aparato panista chihuahuense, que no tuvo la capacidad organizativa para mantener su electorado. Pero no se descarta que otra parte de los electores, menos identificados con la relación PAN-oposición, efectivamente haya vuelto a la tolerancia debido a su revaloración de la imagen del PRI y, sobre todo, de la administración del gobierno estatal.

La relación del electorado chihuahuense con el PAN parece estar afectada de una manera similar a la relación del electorado cardenista (el recién incorporado a la oposición) con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas: demasiada dependencia. El proceso de su construcción ocurrió con demasiada identidad, con demasiada definición de contenido; precisamente aquí radica la ventaja del electorado bajacaliforniano, que trascendió el nivel de los contenidos partidistas y caudillistas. En este contexto, la situación del neocardenismo es extrema entre importantes sectores de su electorado, relacionados con la sociedad tradicional; el contenido de la oposición se reproduce con la persona y su simbolismo. Comparativamente,

²⁴ Quien fue señalado, en 1986, como el candidato panista del PRI.

el caso del electorado de oposición definido y construido en relación con un partido, como el chihuahuense, significa un avance notable en el desarrollo ciudadano.

Considerando la experiencia de las pasadas elecciones locales en Chihuahua, la conformación del electorado de oposición no denota una estabilidad constante ni un crecimiento ascendente como sugeriría el ritmo de la modernización social. Con ello se alude, en contraparte, a la capacidad de supervivencia de la burocracia política y de su partido, facilitada desde el control que permite el poder político y su amplia variedad de recursos.

Puede derivarse de lo expuesto, que el electorado de oposición fronterizo muestra consistencia y radicalidad en relación directa con la "cerrazón" del sistema político. Por el contrario, si el sistema se abre, lo desintegra (Baja California); si se reforma, le baja el perfil (Chihuahua). Al mismo tiempo, en condiciones de un sistema político cerrado, la modernización impulsa el desarrollo de un electorado de oposición con la característica de no guardar una conexión ideológica con ningún partido; la situación predemocrática del país no estimula la discusión sobre los proyectos sociales de los partidos.

3. Las organizaciones políticas del electorado de oposición

El PAN. Epilogo del neopanismo

El desarrollo del electorado de oposición, considerando sus distintos estadios, tiene históricamente por fuente material el proceso de modernización y los cambios que motiva en la estructura social y en la cultura política. Pero tiene también por mecanismo concreto las organizaciones partidistas (o equivalentes funcionales), que traducen el potencial ciudadano en acción ciudadana, necesariamente como voto opositor. La excepción a la norma fue el movimiento neocardenista, que prácticamente sin aparato convocó a una gran masa del electorado. Ubicándonos en el aparato regional fronterizo, la experiencia de la década de los ochenta ha reiterado la importancia del partido político como un centro de referencia decisivo en la traducción del potencial de oposición en acción electoral. En términos muy particulares, ese aparato ha sido el PAN y, más correctamente, la organización neopanista.

Incluso en el estado de Baja California, antes de 1989, la presencia de la organización panista había sido decisiva como mecanismo de convocatoria electoral; después de ese año la importancia

del partido ha disminuido sensiblemente. Otras eran las condiciones del electorado y del proceso de consolidación ciudadana en 1983 y 1986. En esos años el surgimiento del neopanismo desempeñó un papel fundamental en las elecciones locales, en las que disputaron fuertemente al PRI las ciudades de Mexicali y Ensenada.²⁵ En relación con el peso específico que tuvo la organización neopanista en la expansión del electorado de oposición, más notable que en Baja California fueron los casos de Nuevo León, Sonora y, especialmente, Chihuahua. Evidentemente, no puede dejarse de lado que entre los elementos que facilitaron tanto el desarrollo del neopanismo como el del potencial opositor del electorado se encuentra la crisis económica.

En la década de los ochenta, la crisis económica ha cumplido el papel de catalizador de las tensiones acumuladas entre el cambio social y el inmovilismo de las reglas políticas. Si bien para todos los asalariados del país la crisis significó un gran costo en sus ingresos, no todos tuvieron las mismas condiciones culturales ni de organización que permitieran una respuesta electoral consecuente. La resistencia *electoral* se desarrolló primero ahí donde el potencial crítico se había acumulado, y a su vez, existía una cultura política liberal. Durante la primera mitad de la década de los ochenta, el mapa de la oposición parece seguir esa lógica que nuevamente nos remite a la modernización y a sus efectos en la estructura social. Evidentemente, no fueron los únicos factores.

En los estados del norte de México se conjuntó una doble circunstancia: representar lo más acabado del proceso de modernización y, a la vez, ser los receptores inmediatos de los efectos económicos de la crisis. Pero también reunieron las condiciones políticas que facilitaron su expresión electoral: la preexistencia de un aparato político identificado como portador de los intereses de la oposición, el PAN, y un sector empresarial regional involucrado activamente, por vez primera, también como oposición. En estas condiciones, el espectacular crecimiento del electorado de oposición, estructuralmente condicionado por la modernización y coyunturalmente estimulado por la crisis económica, tuvo como principal ca-

²⁵ Sobre Ensenada debe señalarse que se anticipó al perfil ciudadano que ahora presenta la entidad. Su transición se manifestó en 1983, cuando el candidato natural del PRI, David Ojeda, al no conseguir la candidatura a la presidencia municipal se postuló por el PST. Evidentemente, el PST no tenía ninguna fuerza propia que le permitiera ganar las elecciones, por lo que el triunfo que obtuvo Ojeda no se encuentra relacionado con el partido.

nal de expresión al Partido Acción Nacional. El PAN consolidó sus posiciones en Baja California, Sonora, Nuevo León, algunas partes de Coahuila y Tamaulipas, pero sobre todo Chihuahua.

Los primeros efectos de la crisis económica, y especialmente las medidas tomadas al final del sexenio de López Portillo —la nacionalización de la banca y el control integral de cambios— radicalizaron la actitud de importantes sectores empresariales hacia el Estado. De esta manera y sin grandes complicaciones, el sistema político y sus rasgos presidencialistas fueron identificados con el socialismo y, por tanto, ubicados como enemigos irreconciliables de la iniciativa privada.²⁶ En esta lógica, los sectores empresariales ideológicamente más radicales decidieron participar activamente en la política electoral de oposición, apoyando al PAN y prácticamente asumiendo la dirección del partido en algunas regiones del país, sobre todo en los estados norteros. Este proceso dio origen al movimiento *neopanista*, que ya ha sido objeto de diversos análisis.²⁷

Puede ser considerada representativa del efecto ideológico y político de la nacionalización bancaria entre el sector empresarial chihuahuense la siguiente declaración de Pablo Cuarón Galindo, empresario de Ciudad Juárez, vinculado a los grupos más importantes de la región y dirigente del organismo Frente Cívico para la Participación Ciudadana (FCPC), que originalmente promovió la candidatura de Francisco Barrio Terrazas a la presidencia municipal:

El 10. de septiembre de 1982, a las 2:30 de la tarde cuando llegué a reunirme con mi familia a la hora de la comida y acababa de informarse al pueblo de México sobre la expropiación de la banca (...) No era ese sólo hecho el que me entristeció, sino el haber sido engañado

²⁶ “Es tan variado e incierto el estado de ánimo de los empresarios en todo el país, que no me atrevo a definirlo para abarcarlos a todos. Pero sí puedo decirles de las actitudes que la Confederación Patronal desea que adopten, por parte de todos sus socios y, por qué no, también de los que no lo son pero que participan en la actividad económica del país. Esta actitud deberá ser valiente y prudente (...) el que es valiente y prudente no puede ser esclavo, y precisamente eso es lo que todos debemos buscar, no ser esclavos, pues la libertad es lo más sagrado del hombre, como empresario, como ciudadano, como gobernado y como gobernante. Lo sucedido en el fatídico 1982 fue algo demasiado grave y produjo tal traumatismo en todo el país que desaparecerlo no será cosa fácil y no se hará con palabras, sino con hechos.” Declaración de José Ma. Basagoiti, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Ciudad Juárez, en plena consolidación de la corriente neopanista, *El Fronterizo*, 3 de marzo de 1983, pp. 1 y 10.

²⁷ Abraham Nuncio, *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*, México, Nueva Imagen, 1986.

como ciudadano (...) Supe que habíamos pasado a ser controlados por el Estado y nuestros hijos no tendrían la libertad que nosotros habíamos gozado. En ese momento me dije: no puedo permanecer con los brazos cruzados.²⁸

El ingreso activo del sector empresarial al PAN tuvo como efecto decisivo la transformación de la organización y de los recursos del partido. A partir de 1983, el PAN dejó de ser un receptor pasivo de votos de oposición, como había sido durante décadas, para convertirse en un promotor activo; en una organización con capacidad de convocatoria y con amplia disponibilidad financiera para las campañas electorales. El potencial crítico de oposición, previamente desarrollado entre la ciudadanía, encontró una vía de realización a través de la nueva estructura del PAN.²⁹

La oposición ciudadana, que de manera difusa puede ser reconocida en la vida cotidiana y en los medios de comunicación, espontáneamente no se traduce en acción electoral, muchos menos cuando esta actividad se encuentra tan desprestigiada. Necesita *producirse* el encuentro entre ese potencial y un aparato político que lo canalice: esta fue la función principal que cumplió el neopanismo en aquellas regiones donde surgió el espectacular crecimiento del PAN a partir de 1983. El caso más acabado de ese proceso ocurrió en el estado de Chihuahua, durante las elecciones municipales de 1983, las que el PAN ganó en siete de las ciudades más importantes de la entidad, abarcando más del 60% de la población del estado. En menor magnitud y con otras características, si bien permaneciendo constante la vanguardia neopanista, el proceso fue semejante en Baja California, Sonora, Nuevo León, Coahuila y, en menor medida, en Tamaulipas.

La participación del sector empresarial en la expansión de la fuerza electoral del PAN ha sido un rasgo que ha acompañado los éxitos del partido desde 1983 a la fecha, incluyendo el caso de Baja California en 1989 (si bien con un electorado de vanguardia). Evidentemente, la relación con los empresarios no constituye el proceso central, puesto que el PAN no *genera* el electorado de oposición: lo expresa, que es diferente. Sin embargo, no deja de ser decisiva la presencia de una organización electoral que canalice el potencial

²⁸ *Información Procesada*, febrero de 1986.

²⁹ La presencia de la campaña panista en medios de comunicación fue mucho más abundante que la del PRI, al grado que los priistas chihuahuenses acusaban al PAN de haber engañado al electorado mediante la mercadotecnia.

de oposición ciudadano. En esta medida, que es variable en función de las particularidades de los casos,³⁰ la presencia de un sector empresarial activo, definido políticamente como oposición, es un ingrediente que contribuye a explicar el pasado electoral del PAN y, muy probablemente, sus expectativas futuras.

En la actualidad existe una gran diferencia entre el radicalismo que el sector empresarial expresó en 1983 y la situación con que se abre la década de los noventa. Con las rectificaciones en la relación con el sector empresarial emprendidas durante el sexenio de Miguel de la Madrid y, ahora, con la política económica de la administración de Carlos Salinas, la relación entre el gobierno y los empresarios es de consensos mutuos. Adicionalmente, esta situación tiende a reproducirse en los contextos estatales, a veces con mayor intensidad que el promedio nacional (Chihuahua, 1986; Baja California, 1989). Es muy indicativo de la nueva coyuntura un documento elaborado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que describe la nueva relación de los empresarios con el Estado. Con el título de "Continuidad y avance: la política del licenciado Carlos Salinas de Gortari da confianza al sector industrial", el documento expresamente reconoce un panorama muy distinto del de 1983:

Hace varios años, en medio de la pugna del sector privado y el gobierno por una política económica congruente y orientada al apoyo de los sectores productivos, muchas demandas hemos hecho los empresarios al poder político. Ahora las vemos casi plenamente cumplidas, y las que no están cumplidas están ofrecidas: se pidió reducción del gasto público, y el superávit primario es un récord histórico mundial; se pidió la desaparición de subsidios, y muchos han desaparecido, otros están en vías de racionalización. Asimismo pidieron los empresarios la liberalización y privatización de la economía, y la apertura ante el exterior es ya un hecho, a la vez que el sector público está muy reducido, "y lo estará más según la promesa". También pidieron acabar con la economía ficción, y ya está prácticamente liquidada. Paralelamente se demandó que el sector privado fuera considerado en el diseño de la política económica, y la concertación es un hecho prevaiente que permite superar el más grave de los problemas económicos del país, la inflación. En materia de política internacional deman-

³⁰ Por citar dos ejemplos: en Chihuahua entre 1983 y 1986 se trató de una relación fundamental. No fue el caso del PAN en Baja California en 1989; aquí la participación empresarial fue más discreta y menos importante para explicar su triunfo en la elección del gobernador.

daron medida, y ahora "México la enfoca pragmáticamente en la defensa de sus intereses económicos".³¹

Existe un notable descenso del perfil de oposición del sector empresarial; a diferencia de 1983, su actitud de ahora consiste en ser un constructor del consenso gubernamental. Las condiciones que provocaron el desarrollo del neopanismo se orientan a diluirse y, aparentemente, ya mostraron sus primeros efectos político electorales. Ahí donde el vínculo entre el PAN y el sector empresarial era más intenso, en Chihuahua, el nuevo perfil de la relación gobierno-empresarios se tradujo —como mencionamos líneas arriba— en una desarticulación del PAN y en una pérdida de votantes durante las elecciones locales 1989. En cuanto *organización*, el PAN chihuahuense ha sido muy afectado por el rencuentro de los empresarios con el gobierno, en todos los niveles de la administración pública. Su capacidad de convocatoria fue tan mermada que en las acciones de protesta posteriores a las elecciones de 1989, donde señalaron algunas acciones de fraude, no lograron reunir a los miles de activistas que tuvieron tres años atrás.³²

Cabe hacer notar que la desafiliación del neopanismo no fue, evidentemente, la única causa de la derrota sufrida en 1989: también influyeron las acciones emprendidas por el gobierno de Fernando Baeza, quien desde 1986 había practicado un "salinismo" previo a Carlos Salinas, reconstruyendo consensos, introduciendo nuevas reglas en el PRI y, finalmente, eliminando contrastes en relación con la imagen del PAN. De la misma manera que el actual presidente de México, el gobernador de Chihuahua también fue elegido en circunstancias muy discutidas.³³ Un indicador adicional sobre el ambiente político generado desde el gobierno del estado de Chihuahua es la actitud expresa del sector empresarial. El principal empresario de la entidad, reconocido como uno de los fuertes promotores y financieros del neopanismo, Eloy S. Vallina, actualmente tiene una posición política muy distinta de la que se le atribuyó años atrás. Interrogado sobre la relación entre los empresa-

³¹ *Uno más Uno*, 4 de enero de 1989, p. 14.

³² En una movilización organizada por el PAN frente al palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua, protestando por la manipulación del padrón electoral, la prensa reporta que asistieron "una centena" de personas, *La Jornada*, 5 de julio de 1989, p. 7.

³³ Un excelente análisis puede encontrarse en Juan Molinar Horcasitas, "Regreso a Chihuahua", *Nexos*, núm. 111, pp. 21-32.

rios y el PAN, aseguró: "Hay grupos empresariales panistas y van a seguir siéndolo. No es la mayoría, pero ahora no hay situación de confrontación. *Esto se ha ido borrando. Se va a borrar más*".³⁴

La relativa disminución del neopanismo deja *abierta* —con la amenaza de desarticular— la relación entre el potencial de oposición y los partidos, especialmente con el PAN. Es decir, su eventual encuentro va a depender más de la iniciativa propia del potencial de oposición ciudadano y menos del estímulo adicional provocado por una campaña electoral abundante en recursos e insistente en medios de comunicación. Con el descenso del perfil neopanista, para que la oposición se consolide requiere un desarrollo más *ciudadano*, una oposición menos dependiente de la convocatoria de la organización.

El proceso político de los noventa puede caracterizarse por el fin del neopanismo (que no del PAN) sobre todo en los estados fronterizos donde tuvo su asentamiento principal. Con él desaparecen —por lo menos en el corto plazo— las organizaciones partidistas de abundantes recursos que sobresalían en las campañas electorales. El costo puede ser un descenso del electorado de oposición y de su participación en los comicios, sobre todo de aquel que haya hecho depender demasiado su perfil de la organización partidista.

En cuanto al PRI, desde la figura presidencial, que es de donde parten las iniciativas fundamentales, existe la idea de modernizarlo y, de hecho, al conjunto de la burocracia política. Independientemente de las formas en que la modernización del PRI ocurra, es claro que no se trata de un proceso generalizado a todas las regiones y circunstancias. De la misma manera que el mapa de la oposición se distribuye desigualmente, son diferenciadas las presiones por la transformación del partido. En los estados fronterizos, las elecciones de 1988 no fueron la primera llamada para la modernización del PRI. Desde 1983 comenzó a ser manifiesto el crecimiento de la oposición electoral a través del PAN. En cierto sentido, el caso de Chihuahua ha anticipado las tendencias electorales en los estados fronterizos; en particular, Baja California parece seguirle puntualmente, con la diferencia de que al PAN sí le reconocieron su triunfo en la elección de gobernador en 1989.

El caso chihuahuense resulta particularmente interesante en relación con la modernización del PRI. Después de la disputada y dudosa elección de 1986, no sin grandes dificultades comenzaron a

³⁴ *Ibidem.*

introducirse cambios en los cuadros del PRI que desplazaron progresivamente a los sectores más tradicionales de la dirección del partido. En 1989, nuevamente en coyuntura de elecciones locales, los cambios introducidos al PRI permitieron que por primera vez se realizaran elecciones internas (indirectas y de voto secreto) que seleccionaron a los candidatos. En términos del delegado general del CEN en el estado, los nuevos procedimientos evitaron los vicios anteriores, es decir, decisiones cupulares, influyentismo y presiones de corrientes políticas de su partido.³⁵

El relativo éxito de la “modernización” chihuahuense del PRI contrasta radicalmente con las condiciones en que se encuentra en Baja California. En el primer caso, se trata de un cambio dirigido en y desde la estructura vertical del poder; en el segundo, asistimos a cambios indefinidos y, sobre todo, inmersos en condiciones de crisis ante el desplome regional de la estructura corporativa, lo que constituye una novedad de gran trascendencia. Paradójicamente, las condiciones del PRI bajacaliforniano se presentan para cristalizar el nuevo esquema de política interna que posiblemente se defina en la próxima asamblea nacional de ese partido. Por el contrario, en aquellos lugares donde la estructura de poder se mantiene inmune (los estados fronterizos restantes), serán mayores las resistencias de los grupos y organizaciones a renunciar a sus privilegios políticos y económicos.

Los cambios regionales del PRI, por lo menos hasta el momento, se encuentran fuertemente condicionados por la expansión de la oposición electoral y, más aún, por la determinación de la jerarquía nacional del partido por realizarlos. El esquema más probable es que en Baja California el PRI lleve a sus niveles más acabados las reformas internas que introduzca el proyecto salinista de modernización del partido. Después de la derrota de 1989, ésta puede ser su mejor alternativa.

4. El horizonte de los noventa, una aproximación cuantitativa

El futuro electoral de los estados fronterizos del norte de México puede ser esbozado también en forma cuantitativa. Si se realiza una proyección de resultados electorales de años anteriores, el papel de las organizaciones pierde su acento y se destaca el perfil de las acti-

³⁵ *La Jornada*, 11 de abril de 1989, p. 7.

tudes ciudadanas. Desde esta perspectiva, se asume que las tendencias políticas siguen un ritmo relativamente estable. En otros términos, los cambios políticos radicales —que parecen ser el signo de la década a nivel internacional— no quedan bien integrados dentro del esquema de análisis cuantitativo. No obstante, en nuestro caso, la virtud de la proyección cuantitativa es precisamente responder a las expectativas futuras suponiendo que las condiciones actuales —que ya incorporan la dirección hacia el cambio— son esencialmente las mismas. Por lo demás, la añeja estabilidad del sistema político no justifica especular dentro del horizonte mediano por cambios bruscos en su estructura. Ninguno de los actores políticos que hemos considerado en las notas anteriores guarda intereses asociados con movimientos radicales. En todo caso, la radicalidad tiene más probabilidades de proceder del no cambio, es decir, de la lucha de la burocracia política —su sector más conservador— por mantener su red de intereses.

Los escenarios

La elaboración de escenarios prospectivos sobre las tendencias electorales de los estados fronterizos fue hecha siguiendo los resultados de las elecciones presidenciales de 1934 a 1988. Las elecciones presidenciales permiten captar resultados electorales de extensión nacional y expresados simultáneamente —si bien guardando dudas sobre su exactitud— representativos del consenso del sistema político. Dentro de un sistema presidencialista, las elecciones que acompañan la designación del presidente tienen un simbolismo irrenunciable de legitimidad, a la vez que representan la medida sobre las condiciones de ésta. La estadística electoral regional ciertamente es necesaria para afinar las tendencias electorales que en seguida serán presentadas. Sin embargo, sin desconocer su importancia, para los propósitos del presente artículo su introducción significaría perder elementos de comparabilidad entre los estados. Las elecciones presidenciales tienen justamente esa ventaja que aprovechamos para la construcción de dos escenarios de lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales de 1994. Los escenarios tienen una característica dicotómica, ya que divide al electorado en “PRI” y “oposición”, no solamente por razones de homogeneidad estadística sino por lo argumentado previamente sobre el electorado de oposición y sus determinantes, relativamente desconectados de los partidos.

El primer escenario, que denominamos “La fuerza de la tradi-

ción”,³⁶ pone el acento de la proyección estadística en las tendencias electorales de largo plazo, suavizando sus cambios bruscos. En el segundo escenario, denominado “La crisis de legitimidad”, el procedimiento estadístico aplicado hace énfasis en los cambios bruscos de las tendencias electorales, entre los que obviamente destacan los resultados de 1988. En otros términos, el primer escenario no le da un peso especial a la última elección presidencial; lo contrario ocurre en el segundo. En ambos escenarios, el procedimiento estadístico otorga cierta prioridad a los datos recientes, pero lo hace con mayor intensidad en el segundo.³⁷

Escenario 1. La fuerza de la tradición

En este escenario para las elecciones presidenciales de 1994, las expectativas del PRI dependen en gran medida de su amplia trayectoria histórica, que a pesar de su constante decrecimiento mantiene una presencia electoral considerable, todavía capaz de conservarlo mayoritario en el promedio nacional. El supuesto implícito es que las elecciones de 1988 no han modificado sustancialmente la trayectoria electoral del partido expresada en las pasadas décadas. Como puede apreciarse en el cuadro 2 y el mapa 2, el modelo estadístico proyecta para 1994 un promedio de 59.8%, incluso superior al obtenido en 1988 por el partido oficial (50.4 por ciento).

Dentro de las condiciones que presenta este escenario, el único estado que claramente sostiene una mayoría del electorado de oposición es Baja California. En el resto del país, la fuerza del partido oficial parece ser suficiente para conservar la presidencia de la república en 1994.

³⁶ El nombre del escenario fue tomado de una idea de Lorenzo Meyer expresada en “La democracia política...”, *op. cit.*

³⁷ Las extrapolaciones fueron realizadas por el método “exponential smoothing” (Brown, 1962; SAS Institute, 1985). Este método interpola los puntos de una serie histórica de datos, relacionando un promedio ponderado del último valor proyectado con el resultado real. Después de que la proyección de interpolaciones se realiza para la serie histórica de datos, el proceso estadístico hace la proyección para valores futuros. Para el análisis de la estadística presidencial se determinó un valor de 0.3 como ponderador, con el fin de asignarle mayor importancia a los datos más recientes en relación con los primeros de la serie. Las proyecciones fueron hechas mediante una extrapolación lineal (“double exponential smoothing”) y extrapolación cuadrática (“triple exponential smoothing”) (SAS Institute, 1985). La primera fue utilizada para el escenario “La fuerza de la tradición”; la segunda para el escenario “La crisis de legitimidad”.

Cuadro 2

Elección presidencial. Proyección a 1994
Método lineal (*double smoothing*)

<i>Región</i>	<i>PRI en 1988</i>	<i>PRI en 1994</i>
País	50.4	59.8
Baja California	35.7	46.5
Chihuahua	54.6	59.4

Método lineal, ponderador 0.3.

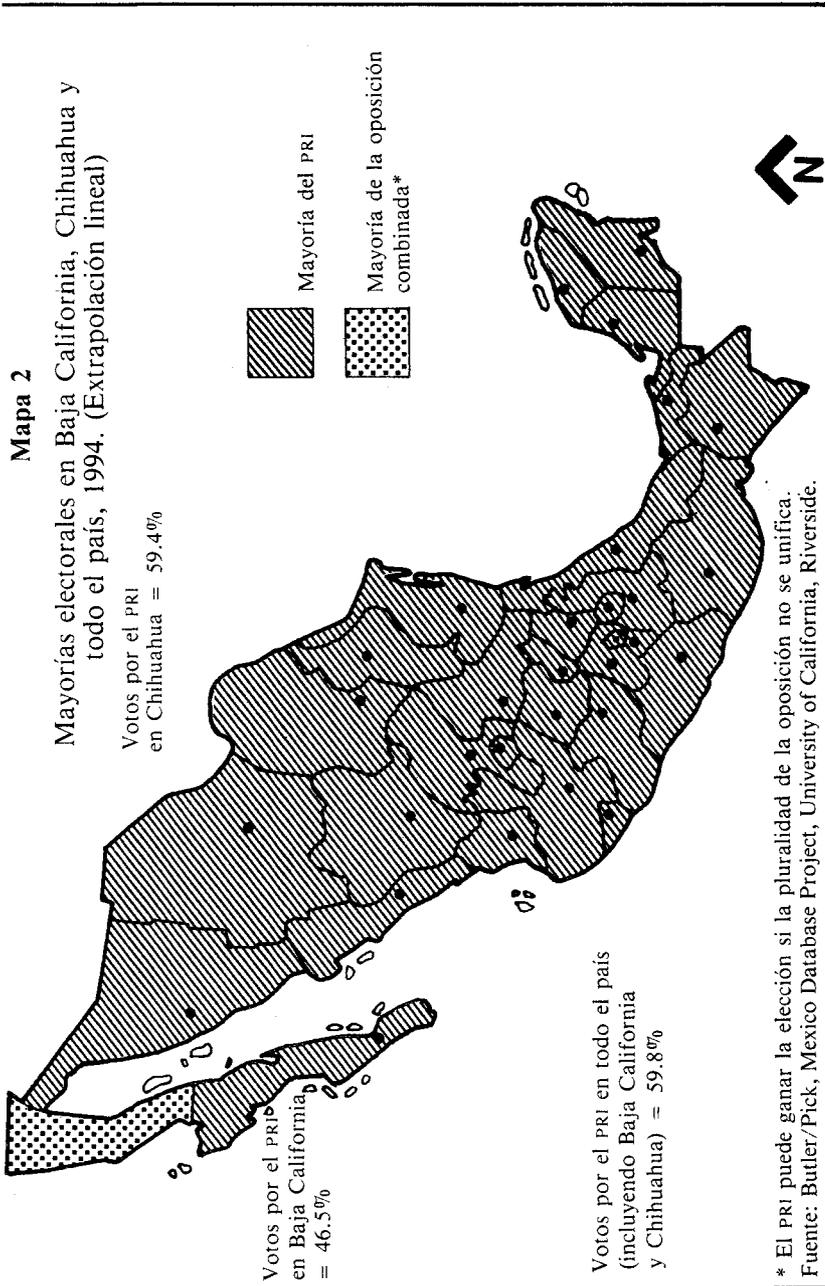
Escenario 2. La crisis de legitimidad

Al contrario de lo que ocurre en el primer escenario, si la proyección hace énfasis en los cambios bruscos de las tendencias electorales y en los últimos resultados, concretamente las elecciones de 1988, las expectativas del PRI hacia 1994 son pesimistas. En este segundo modelo, la crisis de legitimidad del sistema político conserva prácticamente las proporciones cuantificadas en 1988, ligeramente inferiores pero en una cantidad que vuelven mayoritaria a la oposición electoral (50.5% contra 49.5% del PRI). Los resultados los resume el cuadro 3 y el mapa 3.

En todo el país dentro de este escenario, la elección presidencial de 1994 es la imposible reproducción del partido oficial como la organización mayoritaria electoralmente. De hecho, la generación y el reconocimiento de un resultado de esta naturaleza se traduciría en el fin del sistema político actual: la omnipotencia presidencial no tendría el argumento para reproducirse en términos semejantes a los actuales.

Los comentarios expresados sobre el desarrollo del electorado de oposición y sus determinantes principales, la modernización y el movimiento neocardenista, sugieren que el segundo escenario tiene un contenido más realista que el primero. En los próximos años, el ritmo de la modernización económica del país —apoyada por la apertura de la economía al mercado internacional—, se apresta a funcionar como un catalizador que acelere el ritmo de la “transición mexicana”,³⁸ con su inevitable presión sobre el sistema político. De otra parte, si bien no parece repetible un fenómeno como

³⁸ En los términos de Héctor Aguilar Camín.



Cuadro 3

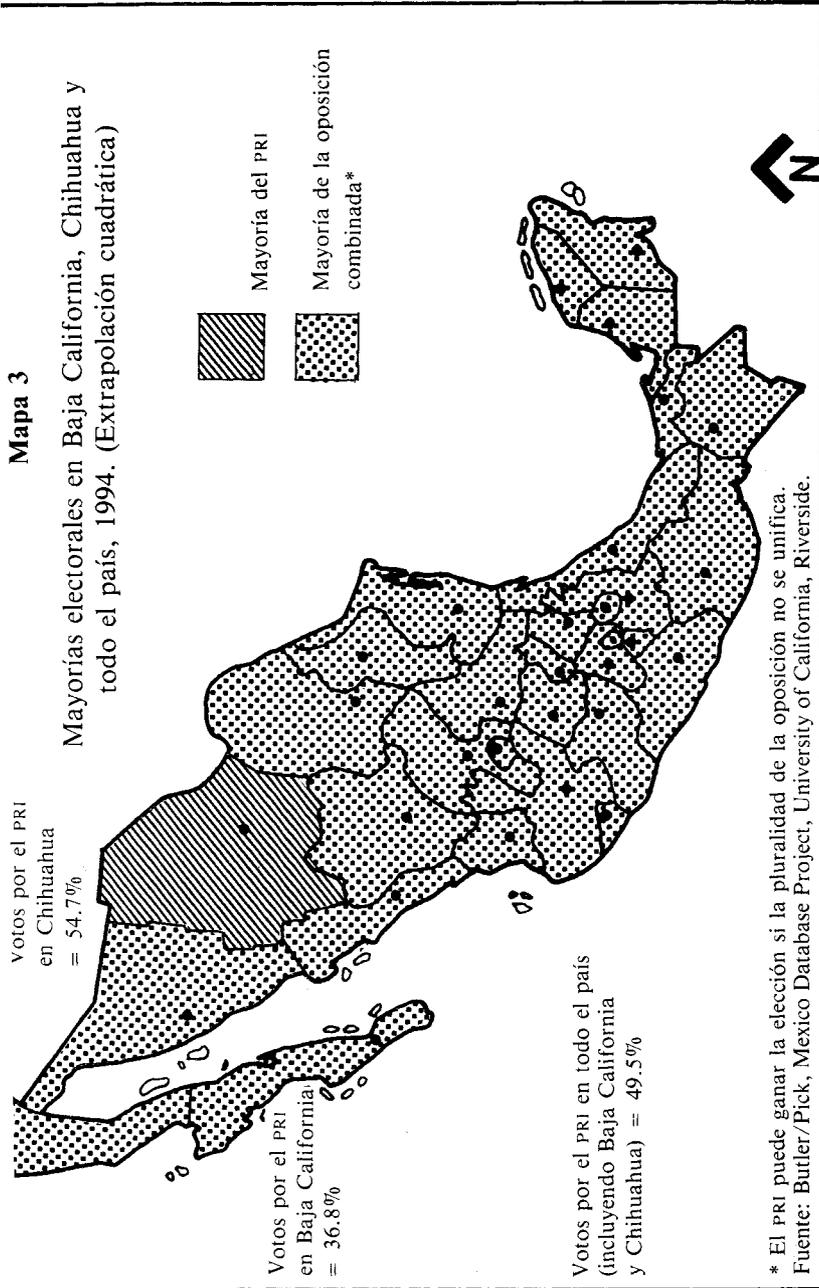
Elección presidencial. Proyección a 1994
Método cuadrático (*triple smoothing*)

<i>Región</i>	<i>PRI en 1988</i>	<i>PRI en 1994</i>
País	50.4	49.5
Baja California	35.7	36.8
Chihuahua	54.6	54.7

Método cuadrático, ponderador 0.3.

el pasado movimiento neocardenista en el futuro cercano, su herencia en la cultura política de amplias capas de la población es ya un capital acumulado que transformó la imagen de invencibilidad del partido oficial, revalorando el papel de las elecciones y el papel ciudadano. Si aceptamos que las elecciones presidenciales de 1988 implicaron un salto cualitativo en la comprensión social del proceso electoral, el panorama que presenta el segundo escenario reconoce estadísticamente que las tendencias anteriores a ese año tienen una importancia menor en la determinación de los patrones electorales futuros. El notable incremento del electorado de oposición observado en 1988 tiene en este escenario un peso decisivo.

Evidentemente, el panorama que presenta el segundo escenario no es una catástrofe para el partido oficial, en la medida en que renuncie a sus pretensiones absolutistas. Por el momento, la modificación de la legislación electoral y del partido, realizadas como formas de poder desde el poder estatal, constituye una ventaja indiscutible; otra es la discusión sobre su legitimidad. El caso de las elecciones locales de Chihuahua en 1989 es una muestra contra la inexorabilidad de las tendencias opositoras al PRI, en la medida en que también éste se modifica, junto con la relación ciudadano-gobierno. Lo que es claro es que sin transformarse, manteniendo controlado el acceso de la oposición a posiciones gubernamentales, la tendencia apunta hacia formas represivas de dominación.



Bibliografía

- Aguilar Camín, Héctor, "El canto del futuro", *Nexos*, núm. 100, 1986, pp. 15-29.
- Aziz Nassif, Alberto, "Chihuahua: entre la abstención y el armisticio", *La Jornada*, 5 de julio de 1989, p. 13.
- _____, "Chihuahua y los límites de la democracia electoral", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, oct-dic., 1987, pp. 159-226.
- Butler, Edgar W. y Jorge A. Bustamante (eds.), "Sucesión presidencial: Binational reflexions", Riverside, Ca., UC-Mexus, 1989, (en prensa).
- Bustamante, Jorge A., *Identidad nacional en la frontera norte de México*, Tijuana, Cefnomex, 1983.
- Cordera Campos, Rolando, Raúl Trejo Delarbre y Juan E. Vega, *México: el reclamo democrático*, Siglo XXI, 1988.
- _____, Arnaldo Córdova, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre, Arturo Whalley Martínez, José Woldenberg, "Para una transición democrática", *Perfil de La Jornada*, 28 de agosto de 1988.
- Córdova, Arnaldo, "La constitución y la democracia", en Rolando Cordera, Raúl Trejo y Juan E. Vega (coords.), *México: el reclamo democrático*, México, Siglo XXI-ILET, 1988, p. 97.
- González Pedrero, Enrique, "La lección de la elección", *Perfil de La Jornada*, 5 de agosto de 1988.
- Guillén López, Tonatiuh, "The social bases of the PRI: Implications for political change", Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman and Peter H. Smith (eds.), *Mexico's alternative political futures*, La Jolla, Ca., Center for US-Mexican Studies, UCSD, 1989, pp. 243-264.
- _____, "¿Qué pasó en Baja California?", *Política*, núm. 15, *El Nacional*, 17 de agosto de 1989.
- _____, "La cultura política y la elección presidencial de 1988. Hacia un análisis del neocardenismo", *Frontera Norte*, núm. 1, 1989.
- Meyer, Lorenzo, "La democracia política: esperando a Godot", *Nexos*, núm. 100, 1986, pp. 39-46.
- Molinar Horcasitas, Juan, "Regreso a Chihuahua", *Nexos*, núm. 111, pp. 21-32.
- _____, *Cuadernos de Nexos*, núm. 14, agosto 1989.
- Monsiváis, Carlos, "Notas sobre la cultura política en México", en Rolando Cordera, Raúl Trejo y Juan E. Vega (coords.), *México: el reclamo democrático*, México, Siglo XXI-ILET, 1988, pp. 383-387.
- Nuncio, Abraham, *El PAN. Alternativa del poder o instrumento de la oligarquía empresarial*, México, Nueva Imagen, 1986.
- Pick, James B., Edgar W. Butler y Elizabeth Lanzer, *Atlas of Mexico*, Boulder, Co., Westview Press, 1989.
- Segovia, Rafael, "La personalización de la política. El elector va por el quién, no por el qué", *Cuadernos de Nexos*, núm. 14, agosto 1989.